

## **TEMA 17. LA GESTIÓN TRIBUTARIA: TRIBUTOS PROVINCIALES, PROPIOS Y DELEGADOS. COMPETENCIAS DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE EN LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE LA DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA.**

### **1. LA GESTIÓN TRIBUTARIA**

La Ordenanza Fiscal General, de fecha 18 de Febrero de 2.016 (Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña número 32) dictada al amparo del artículo 106.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 12 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, e igualmente en desarrollo del apartado e) del artículo 7º y de la disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tiene por objeto establecer los principios básicos y normas comunes a los siguientes tributos:

Tributos propios de la Excm. Diputación Provincial de A Coruña (en adelante la Diputación).

Tributos cuya gestión se haya delegado por las entidades locales de la provincia, entendiéndose aplicable la Ordenanza exclusivamente a aquellas funciones de gestión que hayan sido efectivamente delegadas por dichas entidades. A estos efectos la presente Ordenanza, a través de las normas comunes que contiene, complementa las ordenanzas particulares respectivas.

Las normas contenidas en esta Ordenanza Fiscal serán aplicables supletoriamente a otros ingresos de derecho público en aquellos supuestos concretos no previstos específicamente en la normativa reguladora de los mismos y en cuanto la naturaleza jurídica de cada tipo de ingreso haga posible dicha aplicación.

Las normas de la presente Ordenanza Fiscal General se considerarán parte integrante de las respectivas ordenanzas particulares, en todo lo que no esté especialmente regulado en éstas.

Esta Ordenanza obligará en todo el territorio de la provincia de A Coruña y las normas contenidas en esta Ordenanza obligarán desde la entrada en vigor de la misma hasta su derogación o modificación, de acuerdo con su disposición final.

## 2. LOS TRIBUTOS PROPIOS Y LOS TRIBUTOS DELEGADOS

Los tributos propios de la Diputación y aquéllos cuya gestión tenga encomendada por delegación, se registrarán:

- a) Por la Constitución.
- b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en el artículo 96º de la Constitución.
- c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución.
- d) Por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la legislación general tributaria y presupuestaria y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria.
- e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, específicamente, por la presente Ordenanza Fiscal General y por las restantes ordenanzas particulares de la propia Diputación, o de los ayuntamientos o entidades locales en el caso de los tributos cuya gestión hubiera sido objeto de delegación en favor de la misma. Todo ello de acuerdo con lo previsto en las normas citadas en los apartados anteriores.
- f) Por las instrucciones y circulares que pueda dictar la Presidencia de la Diputación para la aplicación de esta Ordenanza General o de las ordenanzas particulares correspondientes.

Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.

### 2.1. Tributos Provinciales de la Coruña

El sistema de financiación de las Haciendas Locales se encuentra recogido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), norma que ha aportado mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales y ha aumentado la seguridad jurídica de la Administración Tributaria y de los contribuyentes.

El artículo 2º del TRLRHL señala que la Hacienda de las entidades locales estará constituida por una serie de recursos, entre los que se encuentran los recursos de carácter tributario. Los recursos tributarios de las Haciendas Locales están constituidos por los tributos propios y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. Asimismo, los tributos propios se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos propios son: tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.

### 2.1.1. Tasas

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por (Artículo 2.2 a) de la LGT:

- A. La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
- B. La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
  - a. Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:
    - i. Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
    - ii. Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.
  - b. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.

Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes, supuestos previstos en el artículo 20º de la TRLRHL.

- a) Sacas de arena y de otros materiales de construcción en terrenos de dominio público local.
- b) Construcción en terrenos de uso público local de pozos de nieve o de cisternas o aljibes donde se recojan las aguas pluviales.
- c) Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las públicas.
- d) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.
- e) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.

- f) Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
- g) Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
- h) Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
- i) Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada, bocas de carga o elementos análogos que ocupen el suelo o subsuelo de toda clase de vías públicas locales, para dar luces, ventilación, acceso de personas o entrada de artículos a sótanos o semisótanos.
- j) Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada.
- k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre ellos.
- l) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
- m) Instalación de quioscos en la vía pública.
- n) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
- o) Portadas, escaparates y vitrinas.
- p) Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- q) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local.
- r) Muros de contención o sostenimiento de tierras, edificaciones o cercas, ya sean definitivas o provisionales, en vías públicas locales.
- s) Depósitos y aparatos distribuidores de combustible y, en general, de cualquier artículo o mercancía, en terrenos de uso público local.
- t) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local.
- u) Construcción en carreteras, caminos y demás vías públicas locales de atarjeas y pasos sobre cunetas y en terraplenes para vehículos de cualquier clase, así como para el paso del ganado.
- v) Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran establecerse.

Igualmente, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, por ejemplo: Expedición de documentos a instancia de parte, autorización para la utilización en placas distintivos de la entidad local, autorizaciones administrativas de autotaxis, guardería rural, vigilancia especial de establecimientos que lo soliciten, etc.

### 2.1.2. Contribuciones Especiales

La Ley General Tributaria, en su artículo 2.2, letra b), define las contribuciones especiales como "los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos".

Las contribuciones especiales están reguladas en los artículos 28º a 37º y 59º del TRLRHL.

Cuando obtenemos un beneficio o un aumento de valor de los bienes debido a una obra pública o al establecimiento o ampliación servicios públicos. Lo que se recauda, va destinado a sufragar ese gasto concreto. Un Ayuntamiento podría exigir una contribución especial si peatonaliza una calle, a los propietarios de esas viviendas porque se entiende que esos inmuebles han aumentado de valor.

Tendrán la **consideración de obras y servicios locales**:

- a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.
- b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la ley.
- c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de estos, con aportaciones económicas de la entidad local.

No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos en el párrafo a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.

Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

El procedimiento para la aplicación de las contribuciones especiales gira en torno a la aprobación de los acuerdos de imposición y ordenación previstos en el artículo 34º del TRLRHL. Ahora bien, como subraya la doctrina, el Tribunal Supremo ha establecido un detallado régimen jurídico que, pese a tener origen en una regulación ya derogada, mantiene actualmente su vigencia.

Esta reiterada jurisprudencia concreta las siguientes fases y requisitos:

El Tribunal Supremo se refiere al acuerdo de imposición provisional que es el acto por el cual el Ayuntamiento decide en cada caso concreto exigir, respecto de determinadas obras o del establecimiento o ampliación de un servicio, el reparto, en el porcentaje que establezca, del coste de dichas obras y actuaciones. En este acuerdo es obligatorio justificar que las obras o el establecimiento o ampliación del servicio benefician especialmente a determinadas personas físicas o jurídicas.

Asimismo, resulta fundamental fundar razonadamente el porcentaje de reparto, mediante la adecuada ponderación entre el beneficio especial y el beneficio o utilidad general, que siempre debe existir, al menos en un 10 por 100. En particular, el Tribunal Constitucional ha subrayado que lo que pretende la Ley con este límite es que los sujetos pasivos satisfagan únicamente una parte del coste, dado que se parte del hecho de que, en todo caso, una porción de los beneficios generados por la construcción de las obras o servicios repercute en la colectividad

En segundo lugar, simultáneamente, al acuerdo de imposición debe adoptarse el acuerdo de ordenación provisional. Este acuerdo ha sustituido al anterior acuerdo de aplicación

En tercer lugar, el acuerdo de imposición y ordenación definitivos. Transcurrido el plazo de 30 días, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo de imposición y de ordenación definitivos. En este momento se podrán iniciar las obras y las actuaciones de establecimiento o ampliación del servicio público.

Y, por último, como requisito para la ejecución del acuerdo de ordenación es necesario que estén notificadas individualmente las cuotas liquidadas. La notificación debe contener el ofrecimiento de los recursos, que serán el recurso de reposición preceptivo, regulado en el artículo 14.2 del TRLRHL o el recurso de reposición potestativo y la reclamación económico-administrativa en los municipios de “gran población”.

### **2.1.3. Impuestos y recargos exigibles sobre Impuestos de otras Comunidades Autónomas o Entidades Locales.**

Tributos de determinados entes locales: impuestos (municipios) y recargos sobre impuestos (provincias en el impuesto de actividades económicas y las áreas metropolitanas en el impuesto sobre bienes inmuebles).

Entre los recursos tributarios de las Haciendas Locales destacan los impuestos. Los impuestos locales, a su vez, se pueden clasificar en:

1. Impuestos municipales obligatorios, que deben ser exigidos, en todo caso, por los ayuntamientos (artículo 59.1 del TRLRHL).
  - a. Impuesto sobre actividades económicas (IAE).
  - b. Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
  - c. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).
2. Impuestos municipales potestativos, cuya exigencia es voluntaria para los ayuntamientos (artículo 59.2 del TRLRHL).
  - a. Impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones (ICIO).
  - b. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).
  - c. Impuesto sobre gastos suntuarios

Los impuestos obligatorios se caracterizan por el hecho de que deben ser exigidos, en todo caso, por los ayuntamientos sin necesidad de acuerdo de imposición. Los impuestos potestativos son aquellos que pueden ser establecidos por los ayuntamientos mediante las correspondientes ordenanzas fiscales municipales, de acuerdo con el TRLRHL.

## 2.2. Tributos Delegados

Se refiere a ellos el artículo 6º de la Ordenanza Fiscal General de la Diputación de A Coruña indicando que: Podrán ser objeto de delegación en la Diputación los tributos y demás ingresos de derecho público que señalen las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia, aprobadas por el Pleno de la Diputación, con las condiciones y el alcance que en las mismas se recogen.

## 3. COMPETENCIAS DEL PLENO DE LA DIPUTACIÓN

### 3.1. Competencias del Pleno de la Diputación en Materia de Aplicación de los Tributos

Las competencias en materia de aplicación de los tributos correspondientes al Pleno de la Diputación Provincial de La Coruña, se desarrollan en el artículo 11º.

Son competencias del Pleno de la Diputación en materia de aplicación de los tributos, las siguientes:

1. Aprobar las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos y demás entidades públicas de la provincia.
2. Aceptar las delegaciones de competencias tributarias hechas por otras entidades públicas.



3. Aprobación de convenios o acuerdos, con otras entidades públicas, de delegación de competencias en materia de aplicación de los tributos.
4. Aprobación de ordenanzas fiscales y las reguladoras de otros ingresos de derecho público.
5. Las demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las ordenanzas reguladoras.

### **3.2. Competencias del Pleno de la Corporación en Materia de Recaudación**

Corresponden al Pleno de la Corporación, en materia de recaudación, las siguientes competencias:

- a) Presentar tercerías de mejor derecho, cuando en los registros públicos existan anotaciones de embargo o consten derechos inscritos por terceros, con anterioridad a la anotación solicitada por el Servicio Central de Recaudación sobre los mismos bienes.
- b) Adoptar acuerdos o convenios en procedimientos concursales.
- c) Las demás competencias que en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y demás disposiciones aplicables sobre la materia, se señalen como de órganos estatales superiores en rango a la Dirección del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, u órganos a los que se adscriban en un futuro sus competencias.
- d) Las que expresamente le confieran las leyes.

## **4. COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN**

### **4.1. En Materia de Aplicación de los Tributos**

Son competencias del Presidente de la Diputación en materia de aplicación de los tributos, las siguientes (Artículo 12º):

1. Dictar instrucciones y circulares de aplicación de las ordenanzas aprobadas por el Pleno Provincial.
2. Contestar a las consultas tributarias que se formulen a la Administración tributaria provincial.
3. Aprobar los modelos de autoliquidaciones de los tributos y demás ingresos de derecho público.
4. Disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.



## 4.2. En Materia de Gestión Tributaria

La Diputación desarrolla la gestión de los tributos propios y demás ingresos de derecho público y de aquellos tributos y, asimismo, otros ingresos de derecho público, cuya gestión haya sido delegada por parte de las entidades locales de la Provincia en aquellas competencias o atribuciones que en el correspondiente convenio o acuerdo hayan sido objeto de delegación.

La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas señaladas en el artículo 117º de la Ley General Tributaria.

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:
  - a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
  - b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.
  - c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
  - d) El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto tengan trascendencia tributaria.
  - e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
  - f) La realización de actuaciones de verificación de datos.
  - g) La realización de actuaciones de comprobación de valores.
  - h) La realización de actuaciones de comprobación limitada.
  - i) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas.
  - j) La emisión de certificados tributarios.
  - k) La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los términos establecidos en la normativa específica.
  - l) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.
  - m) La información y asistencia tributaria.
  - n) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación.
2. Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado anterior se realizarán de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en su normativa de desarrollo.

La gestión de tributos y demás ingresos de derecho público será dirigida, bajo la superior competencia del Pleno Corporativo, por el Presidente de la Diputación, al cual le corresponde dictar los actos administrativos en el ejercicio de las facultades de gestión contenidas en este título, salvo en aquellos casos que por las normas de carácter general u ordenanzas reguladoras se atribuya la competencia a otro órgano.

Las actuaciones derivadas del ejercicio de las funciones de gestión tributaria de la Diputación las llevará a cabo el Servicio de Gestión Tributaria, bajo la superior dirección del Tesorero, salvo que se encomienden a una unidad distinta.

Son competencia del Presidente de la Diputación en materia de gestión tributaria, las siguientes materias:

1. Dirigir, inspeccionar e impulsar el Servicio de Gestión Tributaria.
2. probar los padrones o matrículas de los tributos y demás ingresos de cobro periódico - contraído previo, ingreso por recibo -.
3. Aprobar las liquidaciones relativas a tributos y demás ingresos de derecho público de cobranza no periódica - contraído previo, ingreso directo -.
4. Concesión de beneficios fiscales, previstos expresamente en las normas de general aplicación.
5. Modificar la forma de exacción de las liquidaciones tributarias o de precios públicos, siempre y cuando la nueva forma de exacción figure dentro de las previstas en la ordenanza reguladora del tributo o precio público.
6. A propuesta motivada de la Tesorería, previo informe de la Intervención, disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.
7. Los demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las ordenanzas reguladoras.
8. Todas las que, no recogidas en este artículo, se señalen en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes a los procedimientos de aplicación de los tributos, en sus normas de desarrollo y en las demás disposiciones aplicables sobre la materia, como competencia del jefe de departamento de gestión tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o del órgano a que se le adscriban en el futuro, y no estén atribuidas a otro órgano en la presente Ordenanza Fiscal General.

Normas especiales de Gestión relativas a tributos municipales en que ésta se delegue en la Diputación.

#### **4.3. En Materia de Inspección Tributaria**

Las actuaciones derivadas del ejercicio de las funciones de Inspección tributaria de la Diputación las llevará a cabo la Unidad de Inspección de Tributos Locales, bajo la superior dirección del Vicetesorero, salvo que se encomienden a una unidad distinta.

No obstante, actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o prueba de hechos o circunstancias con trascendencia tributaria, podrán encomendarse a otros empleados públicos que no ostenten la condición de funcionarios.

Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios de la Unidad de Inspección de Tributos Locales de la Diputación, respecto a los entes delegantes, en todo el ámbito territorial de la provincia.

Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas, para lo que dispondrán de una tarjeta de identidad.

Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.

Debe entenderse que todas las referencias contenidas, tanto en la Ley General Tributaria como en sus disposiciones de desarrollo, al órgano competente para liquidar, lo son al Inspector Jefe de la Unidad de Inspección de Tributos Locales de la Diputación y, en cualquier caso, al Vicetesorero, excepto las atribuidas al Presidente en el artículo 25º:

Son competencias del Presidente, en materia de Inspección tributaria, las siguientes:

- a) Aprobar las tarjetas de identidad del personal inspector.
- b) La autorización de los planes de la Inspección.
- c) La solicitud a la autoridad judicial para entrar en el domicilio de los obligados tributarios.
- d) La autorización, en su caso, para la entrada en los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la Ley General Tributaria.
- e) La ratificación de las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento inspector.
- f) La autorización para la firma de actas con acuerdo.
- g) Aprobar las resoluciones derivadas de las actuaciones y del procedimiento.

#### **4.4. En Gestión Recaudatoria**

La gestión recaudatoria de la Diputación consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias y demás de derecho público de la propia Diputación o de otros entes públicos de la provincia, tras la delegación de las competencias respectivas, y firma del correspondiente convenio, en su caso.

La gestión recaudatoria de la Diputación tendrá por objeto la cobranza de los siguientes recursos:

- a) Tributos y otros ingresos de derecho público de los que sea titular la Diputación.
- b) Ingresos por recargos e intereses que procedan sobre los conceptos enumerados anteriormente.

- c) Tributos y otros ingresos de derecho público correspondientes a ayuntamientos y otros entes públicos que establezcan un convenio o deleguen la función de recaudación de éstos en la Diputación, luego de la adopción del correspondiente acuerdo y, si procede, la firma de convenio.

La gestión recaudatoria, y los medios para llevarla a cabo, no podrá aplicarse para la obtención de aquellos frutos, rentas, productos de los bienes a los que les sean de aplicación las reglas del derecho privado.

La gestión recaudatoria de la Diputación se llevará a cabo por el Servicio Central de Recaudación. La Diputación podrá asumir la gestión recaudatoria de los ingresos de derecho público de otras administraciones públicas, luego de la adopción del correspondiente acuerdo y, si procede, la firma del convenio. Igualmente, la Diputación, podrá adoptar acuerdo para que su gestión recaudatoria se realice por otras administraciones públicas, suscribiendo, si fuese preciso, el correspondiente convenio. Los convenios o acuerdos a los que se refieren serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez suscritos por las entidades públicas correspondientes.

Corresponden al Presidente de la Diputación las siguientes competencias en materia de Gestión Recaudatoria (Artículo 35°):

- a) Restablecer el imperio de la ley en los procedimientos de apremio, decretando la nulidad de las actuaciones posteriores al momento en que se hubiera cometido la infracción.
- b) Dictar actos o resoluciones de gestión recaudatoria cuando éstos no estén atribuidos expresamente a otro órgano.
- c) Establecer y modificar los períodos de ingreso de las deudas de acuerdo con lo que se determine al respecto en la legislación vigente.
- d) Establecer cuantías mínimas para liquidar o exigir los intereses legales o de demora y los recargos del período ejecutivo y para recaudar deudas por el procedimiento administrativo de apremio.
- e) Dictar los actos administrativos de declaración de responsabilidad en el pago de deudas.
- f) Presentar tercerías de mejor derecho, en situaciones de urgencia, cuando en los registros públicos existan anotaciones de embargo o consten derechos inscritos por terceros, con anterioridad a la anotación solicitada por el Servicio Central de Recaudación sobre los mismos bienes, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
- g) Aceptar o acordar la constitución de hipoteca especial.
- h) Otorgar la autorización como entidades colaboradoras a las entidades de depósito.
- i) Resolver las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento, y eximir, excepcionalmente, la constitución de garantías.
- j) Declarar la prescripción de deudas
- k) Acordar la compensación de deudas.
- l) Acordar la declaración de insolvencias y de créditos incobrables, así como su rehabilitación.
- m) Formular conflictos de jurisdicción.

- n) Declarar la responsabilidad solidaria del depositario de bienes embargados.
- o) Autorizar la venta de bienes por concurso.
- p) Otorgar escrituras de venta de inmuebles que resulten enajenados como consecuencia del procedimiento de apremio, y resolver las tercerías en reclamaciones en vía administrativa.
- q) Resolver las reclamaciones de queja contra defectos de tramitación de los órganos y agentes en el ejercicio de la función recaudatoria, tales como incumplimientos, retrasos y otras anomalías.
- r) Aprobar la adjudicación de bienes a la Administración, cuando proceda.
- s) Acordar, a propuesta del Tesorero, que se encarguen de la ejecución material de las subastas empresas o profesionales especializados.
- t) Aprobar las normas generales de organización y funcionamiento del Servicio Central de Recaudación y la distribución territorial de las zonas de recaudación.
- u) Incoar, tramitar y resolver los expedientes de responsabilidad contable en los supuestos expresados en los artículos 15.4 y 177º de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y llevar a cabo cuantas actuaciones requieran la instrucción de los mismos.
- v) Incoar, tramitar y resolver los expedientes disciplinarios del personal recaudador.
- w) A propuesta motivada de la Tesorería, previo informe de la Intervención, establecer límites en las deudas apremiables y límites mínimos por expediente para la realización de cada una de las actuaciones de embargo.
- x) Todas las que, no estando recogidas en este apartado, se señalan en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, en sus normas de desarrollo y en las demás disposiciones aplicables sobre la materia, dictadas por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por el Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda o por los órganos a los que se adscriban en un futuro sus competencias.